CONSTANCIA SECRETARIAL

A despacho del señor Juez el presente acción de cumplimiento la que correspondió por reparto efectuado por la oficina judicial, y que a su vez fue remitido para el efecto por el Honorable Tribunal Administrativo de Caldas. Sírvase proveer.

Manizales, 19 de mayo de 2022.

JUAN FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
SECRETARIO

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Manizales, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Visto el informe secretarial que antecede, dentro de la presente ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO promovida por los señores ÁLVARO SALAZAR MARÍN y GERMÁN VALLEJO OBANDO contra el MUNICIPIO DE MANIZALES – EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA “ERUM”, radicada bajo el número 17001310300620220005900, para resolver sobre si se avoca el conocimiento de la misma.

II. ANTECEDENTES

- Los señores ÁLVARO SALAZAR MARÍN y GERMÁN VALLEJO OBANDO presentaron ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO con las pretensión que se ordene a las accionadas abrir espacios afectivos y amplios de participación de la comunidad para la REFORMULACIÓN del Macroproyecto de San José, en los hechos se señaló que se está tramitando la modificación del Macroproyecto de Interés Nacional “Centro Occidente de Colombia – San José”, aprobada por la Resolución No. 1453 del 27 de julio de 2009 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y que dicho proyecto fue modificada el siete ocasiones, incluida la Resolución No. 544 de 2017. Se manifestó por los accionantes que la ERUM tramita una nueva modificación del proyecto ante al Ministerio de Vivienda, pero no ha adelantado un mecanismo de participación democrática, según el artículo 4 de la Ley 388 de 1997, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la participación ciudadana.

- Mediante auto del 30 de noviembre de 2021 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales declaró su falta de competencia para conocer de la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO que le fue repartida el día 24 de noviembre de 2022 por la Oficina Judicial, y que fuera promovida por los señores ÁLVARO SALAZAR MARÍN y GERMÁN VALLEJO OBANDO contra el

MUNICIPIO DE MANIZALES – EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA “ERUM, y ordenó remitirla Al Honorable Tribunal Administrativo de Caldas para que fuera repartida entre los Honorables Magistrados.

- Efectuado el reparto le correspondió el conocimiento al Despacho del Honorable Magistrado Dr. AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN, el cual mediante auto del 16 de diciembre de 2021 procedió a INADMITIR la demanda, y posteriormente mediante auto del 14 de enero de 2022 declaró su falta de competencia para conocerla, y dispuso devolverla al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales.
- Por auto del 25 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales dispuso la admisión de la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO de la referencia, y realizó los demás ordenamientos correspondientes.
- El día 18 de febrero de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales profirió la Sentencia No. 001, en la cual se declararon no prósperas las excepciones propuestas dentro del trámite, y en consecuencia declaró el incumplimiento de lo ordenado por el artículo cuarto de la Ley 388 de 1997 por parte de la Alcaldía de Manizales y a la Empresa de Renovación Urbana -ERUM- respecto del Macroproyecto de San José de esta ciudad. Igualmente, les ordenó formalizar acciones y mecanismos reales, concretos y serios en los que se involucre a la comunidad afectada por dicho Macroproyecto, escuchando a los voceros legalmente constituidos y fortaleciendo, hasta donde sea posible la conjugación de intereses de los intervinientes, (Estado y Comunidad), proceso en el cual, de ser pertinente, se incluya al Consejo Municipal para lo de su competencia constitucional y legal en asuntos de control político.
- Por auto del 25 de febrero de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales concedió la impugnación presentada por el MUNICIPIO DE MANIZALES y por la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES – ERUM-, y ordenó la remisión del expediente digital al Honorable Tribunal Administrativo de Caldas.
- Efectuado el reparto por la Oficina Judicial, correspondió el conocimiento de la apelación al Honorable Magistrado PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA, el cual profirió auto del 4 de marzo de 2022 en el cual ordenó a la ERUM informar a más tardar el día 7 de marzo de 2022 si la Resolución 025 del 29 de enero de 2020 se encontraba vigente, y en caso contrario comunicar cuál fue la resolución que la reemplazó y allegar copia.
- Mediante auto del 15 de marzo de 2022, el Honorable Tribunal Administrativo de Caldas declaró la falta de jurisdicción para conocer de la

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, y dispuso remitir el mismo para el reparto a los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad.

Para la anterior determinación, consideró que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997, la jurisdicción competente para tramitar la demanda objeto de estudio es la ordinaria y no la contencioso administrativa. Asimismo dispuso que, debido a que se puede presentar un conflicto de jurisdicción, la invalidez de la sentencia se dejará a la decisión de la autoridad judicial que asuma la competencia.

III. CONSIDERACIONES

Normativa

La Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política, dispone:

ARTICULO 1o. OBJETO. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos.

Por su parte el artículo 3 reza a la letra:

ARTICULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.

Por su parte el artículo 155 del CPACA, en cuanto a la competencia de los jueces administrativos para conocer de dicho tipo de acciones, dispuso:

ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.

Caso concreto

De la normativa expuesta, encuentra el Despacho mediante La Ley 393 de 1997 se desarrolló el artículo 87 de la Constitución Política, y en su artículo 3 atribuye la competencia de las acciones dirigidas al cumplimiento de las normas con fuerza de Ley o Acto Administrativo, en primera instancia a los

Jueces Administrativos del Circuito del domicilio del accionante, y en segunda instancia, al Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.

Por su parte el artículo 155 del CPACA dispuso la competencia de los jueces administrativos en primera instancia, y en su numeral 10 incluyó los asuntos relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.

Conviene en este punto precisar que si bien el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 dispone que el Juez competente para tramitar la demanda objeto de estudio es el Juez Civil del Circuito, lo cierto es que norma posterior como es el CPACA, le otorga dicha competencia al Juez y Tribunal Administrativo; y acorde con ello, de conformidad con los principios de interpretación de la Ley, debe darse aplicación a esta última disposición normativa.

Finalmente los artículos 19 y 20 del Código General del Proceso traen la competencia del Juez Civil del Circuito en única y primera instancia, entre las cuales no enlista las acciones de cumplimiento.

De cara a lo precedente, concluye este Despacho que carece de competencia para tramitar y decidir la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO de la referencia. En este sentido, y teniendo en cuenta que el trámite aquí adelantado se sigue contra entidades de orden municipal -MUNICIPIO DE MANIZALES Y ERUM-¹, el asunto debe ser ventilado ante el Juez competente, como en efecto se hizo, a saber: en primera instancia por el Juez Administrativo, y en segunda por el Tribunal Contencioso Administrativo, con todo, ha de ser dirimido por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Como consecuencia de lo discurrido, NO SE AVOCARÁ el conocimiento de la presente ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

CONFLICTO DE JURISDICCIONES

La Corte Constitucional ha señalado, en cuanto al conflicto de jurisdicciones lo siguiente²:

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

¹ Inicialmente la acción se dirigió contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, sin embargo, frente a la manifestación realizada por los accionantes referentes a que el incumplimiento se predicaba del municipio de Manizales, el trámite se continuó únicamente frente a este y a la ERUM.

² Auto 041 de 2021. M.P. DIANA FAJARDO RIVERAS

1. Este Tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”³

2. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:⁴ (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones⁵; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional⁶; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.⁷

3. (...) Bajo esta misma línea de razonamiento, la Sala ha indicado que un conflicto de competencia entre jurisdicciones no puede provocarse autónoma y unilateralmente por un solo órgano, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales, de jurisdicciones diferentes, reclaman para sí el conocimiento o niegan ser competentes para tramitar el asunto correspondiente.⁸

4. (...)

5. En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha precisado que “la impugnación de competencia, prevista en el artículo 341 de la Ley 906 de 2004, es una figura diseñada para resolver los conflictos de competencia que se suscitan al interior de la jurisdicción penal ordinaria, la cual no puede aplicarse frente a conflictos de jurisdicciones”⁹. En consecuencia, la posibilidad de que la Sala Plena se pronuncie de fondo en torno a un conflicto de jurisdicciones está supeditada a la verificación de la existencia de los pronunciamientos de, al menos, “dos autoridades judiciales, de jurisdicciones diferentes, que reclaman para sí o niegan su competencia”, comoquiera que dicha clase de colisiones “no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso.”¹⁰

Ahora bien, entre las funciones asignadas a la Corte Constitucional, el artículo 241 numeral 11 dispone:

ARTICULO 241. *A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:*

³ Autos 345 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 328 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y 452 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

⁴ Auto 155 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

⁵ En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales; o (c) ambas autoridades pertenezcan a la misma jurisdicción, pues se trataría de un asunto interno de la misma que debe ser definido por la autoridad competente para el efecto (*Cfr.* Artículos 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).

⁶ En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP).

⁷ Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.

⁸ Auto 556 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En el mismo sentido, se puede consultar el Auto 328 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

⁹ Auto 329 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

¹⁰ *Ibidem.*

(...)

11. <Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

Corolario de lo expuesto, se planteará conflicto negativo de competencia frente al Tribunal Administrativo de Caldas, el cual deberá ser dirimido por la Corte Constitucional, por ocurrir el conflicto entre distintas jurisdicciones.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas,

RESUELVE

Primero: NO AVOCAR el conocimiento de la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO promovida por los señores ÁLVARO SALAZAR MARÍN y GERMÁN VALLEJO OBANDO contra el MUNICIPIO DE MANIZALES – EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA “ERUM”, por las razones esbozadas en las consideraciones.

Segundo: PLANTEAR conflicto negativo de jurisdicción frente al Tribunal Administrativo de Caldas, el cual deberá ser dirimido por la Corte Constitucional.

Tercero: REMITIR el presente expediente digital a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencia presentado entre la Jurisdicción Ordinaria Y La Contencioso Administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

**GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO
JUEZ**

**JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CTO.
MANIZALES CALDAS
NOTIFICACIÓN POR ESTADO**

*El auto anterior se notifica en el
Estado electrónico del 20/mayo/2022*

**JUAN FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
Secretario**

Firmado Por:

**Guillermo Zuluaga Giraldo
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 006
Manizales - Caldas**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2a553c3acd3bd161deed835203f50aeec210701f90a5cbbe290bc2577e5edff**
Documento generado en 20/05/2022 02:05:27 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**